



La consulta plantea las medidas que han de adoptarse ante las solicitudes efectuadas por diversos afectados de que se proceda a la cancelación de sus datos personales contenidos en el Libro de Confirmaciones o a los datos relativos a su condición de contrayente de matrimonio canónico y contenidos en el Libro Sacramental de Matrimonios de los que es responsable la consultante.

PRIMERO. Cuestiones generales.

I

Como cuestión previa, debe recordarse que conforme a lo señalado en reiteradas sentencias de la Audiencia Nacional, datando la primera de ellas de 10 de octubre de 2007, los libros sacramentales han de ser considerados ficheros de datos de carácter personal a los efectos previstos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal, y su normativa de desarrollo.

En este sentido, la citada Sentencia establece una doctrina relacionada con los Libros de Bautismo que puede igualmente considerarse aplicable a los restantes libros sacramentales de los que es responsable la consultante, señalando lo siguiente:

“Los Libros de Bautismo, por tanto, en la medida en que recogen datos de carácter personal -al menos el nombre y apellidos del bautizado y el hecho mismo de su bautismo- con arreglo a criterios preestablecidos que permiten su tratamiento, tienen la consideración de fichero y están sujetos, en cuanto tales, a la legislación en materia de protección de datos.

Con arreglo a lo expuesto no puede negarse que, por ejemplo, la expedición de una partida de bautismo sea una forma de tratamiento de datos personales y que éstos, al estar contenidos en el Libro de Bautismo con arreglo a criterios preestablecidos, determinen que éste tenga la consideración legal de fichero.

En definitiva, cuando el legislador ha querido excluir del ámbito de aplicación de la LOPD determinados ficheros lo ha dicho expresamente (Art. 2.2 LOPD), sin que en dichas excepciones se comprendan los Libros y Registros de la Iglesia Católica”.

II

Dicho lo anterior, debe recordarse que las sentencias a las que viene haciéndose referencia desestiman diversos recursos interpuestos contra resoluciones de esta Agencia relacionadas con el ejercicio del derecho de cancelación de los datos del afectado en los citados libros de bautismo, en las que en resumen, la Agencia insta a los Arzobispados para que en el plazo de 10 días remitan al reclamante certificación en la que se haga constar que ha anotado en su partida de bautismo el hecho de que ha ejercido su derecho de cancelación ó que motive las causas que lo impiden, al considerarse que determinados datos de carácter personal contenidos en el Libro de Bautismo no cumplen plenamente el principio consagrado en el artículo 4.3 de la Ley Orgánica 15/1999, según el cual “los datos de carácter personal serán exactos y puestos al día de forma que respondan con veracidad a la situación actual del afectado”. De este modo, se consideraría cumplido dicho principio en caso de que se hiciera constar expresamente en el Libro de Bautismos la solicitud de cancelación del afectado.

Esta conclusión es la mantenida igualmente en las Sentencias citadas, al recordarse en las mismas que:

“Aunque la Agencia Española de Protección de Datos no manifieste expresamente cuáles datos son inexactos o no puestos al día, es claro para este Tribunal que solo puede referirse a la pertenencia a la Iglesia Católica. En la Nota elaborada por la Dirección General de Asuntos Religiosos se afirma que el hecho de que una persona se considere o no católico, practique o no la religión, es distinto de si fue o no bautizado, hecho que no prejuzga las creencias posteriores de las personas ni su pertenencia a la Iglesia Católica, así como que el asiento registral de bautismo no es prueba de la condición de católico.

Estas afirmaciones no empecen, sin embargo, para que el bautismo como sacramento tenga un sentido de iniciación cristiana, de incorporación a la Iglesia, como se afirma en el propio catecismo de la Iglesia Católica. Su constancia documental, por ello, no puede considerarse irrelevante desde esta perspectiva, pues supone al menos presunción o indicio de pertenencia. Será en consecuencia una información exacta en todas sus manifestaciones si el afectado, la persona a la que viene referido el asiento, manifiesta expresamente su voluntad de no pertenecer a la misma.”

Por último, las Sentencias analizan la aplicabilidad de lo dispuesto en el artículo I apartado 6 del Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede, sobre Asuntos Jurídicos, de 3 de enero de 1979, según el cual “el Estado respeta y protege la inviolabilidad de los archivos, registros y demás documentos pertenecientes a la Conferencia Episcopal Española, a las Curias episcopales, a las Curias de los superiores mayores de las Ordenes y Congregaciones

religiosas, a las parroquias y a otras instituciones y entidades eclesiásticas”, señalando que “los archivos y registros relacionados en el citado artículo del Acuerdo Internacional se encuentran protegidos de cualquier intromisión procedente del Estado y resultan inviolables frente al mismo. Ahora bien, tal inviolabilidad no es predicable frente al ciudadano cuando ejercita el derecho fundamental previsto en el artículo 18.4 de la CE, en cuyo contenido esencial se integra el poder de disposición sobre los datos relativos a su persona. La solución inversa a la expuesta, que postula el Arzobispado recurrente, equivaldría a reconocer una superioridad de la norma contenida en un Tratado, frente a la norma constitucional”.

Las cuestiones analizadas en las citadas sentencias resultan relevantes para enjuiciar los supuestos ahora planteados, permitiendo poner de manifiesto las similitudes y diferencias que pudieran concurrir en ambos casos y tomando en todo caso en consideración como punto de partida las normas reguladoras del derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal, a las que se encontrarán sometidos los libros sacramentales, conforme a lo que ha venido indicándose.

No obstante, será también preciso tener en cuenta las normas específicas que inciden sobre los tratamientos a los que se está haciendo referencia en los supuestos planteados, así como las especialidades puestas de manifiesto en la consulta. Para ello se hará en primer lugar referencia a las solicitudes relacionadas con el libro de confirmaciones, estudiándose posteriormente las relativas al libro de matrimonios.

SEGUNDO. Cuestiones relacionadas con la solicitud de cancelación de los datos en los Libros de Confirmaciones.

III

En relación con la confirmación, el canon 879 del Código de Derecho canónico la define como el sacramento “que imprime carácter y por el que los bautizados, avanzando por el camino de la iniciación cristiana, quedan enriquecidos con el don del Espíritu Santo y vinculados más perfectamente a la Iglesia, los fortalece y obliga con mayor fuerza a que, de palabra y obra, sean testigos de Cristo y propaguen la fe”, pudiendo recibir este sacramento, según el canon 889.1, “todo bautizado aún no confirmado”.

Respecto a su constancia y anotación, dispone el canon 895 que “Deben inscribirse los nombres de los confirmados en el libro de confirmaciones de la Curia diocesana, dejando constancia del ministro, de los padres y padrinos, y del lugar y día de la administración del sacramento, o, donde lo mande la Conferencia Episcopal o el Obispo diocesano, en el libro que ha de guardarse en el archivo parroquial; el párroco debe notificarlo al párroco del lugar del

bautismo, para que se haga la anotación en el libro de bautismos a tenor del canon 535.2”.

De lo dispuesto en los cánones citados se derivan dos consecuencias esenciales:

- Por una parte, la confirmación, al igual que el bautismo pone de manifiesto la pertenencia del confirmando a la Iglesia y la profesión de sus creencias, quedando estas además reforzadas y fortalecidas por el don del Espíritu Santo.
- Por otra, el Código de Derecho Canónico impone el deber de inscripción de los nombres de los confirmados en el correspondiente Libro Sacramental, debiendo además anotarse la celebración del sacramento en el Libro de Bautismos.

La primera de las conclusiones alcanzadas afectará a la fundamentación jurídica que deba darse en relación con la solicitud efectuada de cancelación de los datos contenidos en los Libros de Confirmaciones; la segunda implica la necesaria existencia de dichos Libros, sin perjuicio de que, como se indica en la consulta, su llevanza no tiene en la práctica lugar en todos los supuestos, produciéndose en ocasiones una mera remisión de la información a la parroquia en que el confirmado fue bautizado para su constancia en el Libro de Bautismos.

IV

Señalado lo anterior, deberán ahora analizarse las peculiaridades que con relación a los libros de confirmaciones y la aplicabilidad de la Ley Orgánica 15/1999 se plantean en la consulta, dado que en la misma se indica que los mencionados Libros únicamente contienen un relación nominal de los confirmados, contenida en la correspondiente Acta Sacramental, sin que existan índices de personas asociados a los libros y sin que exista al propio tiempo espacio físico al margen de la referencia individualizada de cada uno de ellos para que la constancia de su voluntad de no pertenencia a la Iglesia católica y de ejercicio del derecho de cancelación no afecte a los restantes participantes en la recepción del sacramento, que no han manifestado su voluntad de ejercicio del derecho de cancelación.

La respuesta a las dos cuestiones planteadas se efectuará sin perjuicio de analizar en un momento posterior la procedencia o improcedencia de acceder a la solicitud formulada, limitándonos en este momento a analizar si las circunstancias mencionadas podrían afectar al ejercicio del derecho con carácter previo a analizar esa procedencia.

La primera cuestión que ha de resolverse a la luz de las dudas planteadas es la de si el Libro de Confirmaciones ha de ser considerado un fichero de datos de carácter personal sometido a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, dado que el mismo no aparece estructurado mediante la existencia de un índice de personas, lo que dificultaría la búsqueda de los datos concretos referidos a un determinado confirmado.

El artículo 5.1 n) del Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, aprobado por Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, define fichero no automatizado como “todo conjunto de datos de carácter personal organizado de forma no automatizada y estructurado conforme a criterios específicos relativos a personas físicas, que permitan acceder sin esfuerzos desproporcionados a sus datos personales, ya sea aquél centralizado, descentralizado o repartido de forma funcional o geográfica”.

En el presente caso, siguiendo la doctrina sentada por la Audiencia Nacional a la que se ha hecho referencia con anterioridad no cabe duda que los datos contenidos en el Libro de Confirmaciones, en cuanto contienen al menos los datos relativos al nombre de los confirmados y su condición de tales han de ser considerados como datos de carácter personal, planteándose si el citado Libro puede considerarse estructurado a los efectos previstos en el artículo 5.1 n) del reglamento que acaba de citarse.

Debe tenerse en cuenta para ello el hecho de que la celebración del sacramento de la confirmación no resulta cotidiana en la práctica, teniendo lugar generalmente en períodos como mínimo anuales. Al propio tiempo, el número de confirmados en cada ocasión no resulta como regla general tan numeroso que impida la identificación de los mismos a partir del conocimiento del momento en que se administró el sacramento.

Teniendo estas circunstancias en cuenta, el conocimiento por el responsable del fichero de la fecha, incluso por mera referencia al año en que se administró el sacramento, y de la parroquia en que el mismo fue administrado permitirá acceder, sin esfuerzos desproporcionados, al dato identificativo del confirmado.

En consecuencia, a pesar de las especiales circunstancias concurrentes en el Libro de Confirmaciones, cabe considerar que el mismo ostenta la condición de fichero a los efectos previstos en la Ley Orgánica 15/1999, no existiendo norma alguna que permita la exclusión de su aplicación, tal y como se analiza en la doctrina de la Audiencia Nacional, contenida en las sentencias a las que se ha hecho referencia en el Apartado 1 de este informe.

Dicho lo anterior, y como también se ha indicado con anterioridad, se señala que pese a lo expresamente previsto en el Código de Derecho canónico el Libro de Confirmaciones no existe en todos los casos, por lo que en determinadas ocasiones no será posible atender a la solicitud del afectado de

cancelación de sus datos en el mencionado Libro como consecuencia de la propia inexistencia del fichero.

Esta circunstancia no podrá tampoco afectar a la conclusión final que se alcance, que deberá lógicamente ir referida a los supuestos en los que exista el Libro, dado que en caso contrario resultará imposible acceder a la cancelación de un dato contenido en un fichero que no existe, lo que implica la inexistencia del tratamiento respecto del que se solicita la cancelación.

En consecuencia, en relación con las dos cuestiones que se vienen analizando, el Libro de Confirmaciones, cuando exista, se encontrará sometido a la Ley Orgánica 15/1999, al ser posible, sin esfuerzos desproporcionados, la localización de los datos del confirmado.

A tal efecto, debe recordarse que el artículo 25 del Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, tras referir en el apartado 1 los requisitos que deberá contener la solicitud de ejercicio de los derechos, prevé en su apartado 3 que “en el caso de que la solicitud no reúna los requisitos especificados en el apartado primero, el responsable del fichero deberá solicitar la subsanación de los mismos”.

Una interpretación razonable de este precepto conduce a la conclusión de que ejercido el derecho de cancelación, será posible requerir al interesado para que complete su solicitud indicando la información que pudiera resultar necesaria para la localización del dato que, como se ha dicho podrá consistir en la mención de la Parroquia en que se administró el sacramento y el año en que se produjo la celebración. De este modo, si el interesado no completase esta información, cuando fuese necesaria, podría denegarse la cancelación.

Al propio tiempo, el plazo para atender el derecho deberá entenderse iniciado en el momento en que, de ser necesaria y haberse solicitado, el afectado aportase la información requerida, dado que con anterioridad podrá resultar imposible atender a la solicitud.

V

Entrando ya en la cuestión de fondo; es decir, la procedencia o improcedencia de atender a la solicitud de cancelación formulada, debe tenerse en cuenta lo indicado con anterioridad en cuanto a la definición y naturaleza del sacramento de la confirmación, en los términos previstos en el Canon 879 del Código de Derecho Canónico, así como la doctrina emanada de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.

En este sentido, como se avanzó, el sacramento de la confirmación pone de manifiesto la pertenencia del confirmando a la Iglesia y la profesión de sus

creencias, quedando estas además reforzadas y fortalecidas por el don del Espíritu Santo.

En consecuencia, la garantía de la exactitud de los datos contenidos en el Libro de Confirmaciones, en que se pone de manifiesto la reafirmación de la voluntad del confirmado de pertenecer a la Iglesia Católica, sólo resulta posible, siguiendo la citada doctrina en caso de que junto con dicha manifestación, derivada de la recepción del sacramento, se pone de manifiesto, en caso de solicitarse por el afectado, su deseo de no ser considerado miembro de la Iglesia.

De este modo, y como garantía del cumplimiento del mencionado principio de exactitud, consagrado por el artículo 4.3 de la Ley Orgánica 15/1999, la solución que ha de darse al presente supuesto ha de resultar similar a la establecida en relación con la inscripción de los afectados en el Libro de Bautismos, debiendo anotarse en el Libro de Confirmaciones el hecho de que el interesado ha ejercido su derecho de cancelación, tal y como en relación con el Bautismo han señalado esta Agencia y la Audiencia Nacional.

En la consulta se indica que dado el modo en que se produce la transcripción de los datos en el mencionado Libro, resulta imposible la constancia de esta circunstancia de forma individualizada al margen de la inscripción del concreto afectado, por lo que la inclusión de la nota marginal perjudicaría los derechos de los restantes confirmados.

A nuestro juicio, el problema podría resolverse indicando expresamente la identificación del concreto solicitante en la anotación que se realizase, bien al margen del Acta, bien al pie de la misma. En ese supuesto, sería evidente que la cancelación únicamente afectaría al solicitante del derecho y no a los restantes contrayentes, cuyos datos permanecerían inalterados en el Libro.

Esta solución, además, contribuye a la garantía del principio de exactitud, dado que la anotación ha de aparecer referida únicamente al solicitante y nunca a terceras personas que recibieron el sacramento con él y cuya voluntad de pertenencia a la Iglesia Católica resulta en todo caso independiente de aquel solicitante, no existiendo más vínculo entre ellos que el derivado del hecho de haber recibido el sacramento de la confirmación en una misma celebración.

VI

A la vista de todo lo señalado hasta el presente momento, deben extraerse las siguientes consecuencias en relación con la solicitud de cancelación de los datos contenidos en los Libros de Confirmaciones:



- Los Libros de Confirmaciones han de ser considerados ficheros con datos de carácter personal, sometidos a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 y su normativa de desarrollo.
- En caso de solicitud de cancelación de los datos en el mencionado Libro, deberá adoptarse una solución similar a la establecida para los Libros de Bautismo, haciéndose constar mediante anotación marginal el ejercicio del derecho.
- La anotación deberá indicar la identificación concreta del afectado que ejerce el derecho, a fin de no perjudicar los derechos de las restantes personas a las que se administró el sacramento de forma simultánea con el afectado.
- Si fuera necesario, una vez presentada la solicitud podrá solicitarse motivadamente al interesado su subsanación, conforme a lo dispuesto en el artículo 25.3 del reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, a fin de que aporte información acerca de la parroquia y la fecha, al menos por indicación del año, en que se administró el sacramento. En ese caso, el plazo en que procederá resolver sobre la solicitud de ejercicio del derecho no se iniciará hasta que se aporte la información solicitada.
- En caso de no existir Libro de Confirmaciones, como se señala en la consulta, no procederá la estimación de la solicitud, dado que no existe el fichero respecto del que la misma se ejercita.

TERCERO. Cuestiones relacionadas con la solicitud de cancelación de los datos en los Libros de Matrimonios.

VII

Desde el punto de vista canónico, el canon 1057 del Código de Derecho Canónico dispone que “el matrimonio lo produce el consentimiento de las partes legítimamente manifestado entre personas jurídicamente hábiles, consentimiento que ningún poder humano puede suplir”, consistiendo dicho consentimiento en “el acto de la voluntad por el cual el varón y la mujer se entregan y aceptan mutuamente en alianza irrevocable para constituir matrimonio”.

Además, señala el canon 1134 que “del matrimonio válido se origina entre los cónyuges un vínculo perpetuo y exclusivo por su misma naturaleza”. Así, según el Canon 1141 “el matrimonio rato y consumado no puede ser disuelto por ningún poder humano, ni por ninguna causa fuera de la muerte”.



En cuanto a su constancia registral, el Canon 1121 ordena al párroco del lugar “anotar cuanto antes en el registro matrimonial los nombres de los cónyuges, del asistente y de los testigos y el lugar y el día de la celebración, según el procedimiento prescrito por la Conferencia Episcopal o por el Obispo diocesano”. De dicha inscripción se hará igualmente anotación conforme al canon 1122 “en los registros de bautismos en los que está inscrito el bautismo de los cónyuges”.

No obstante lo indicado, el propio Código establece determinados supuestos en los que habrá de considerarse nulo el matrimonio celebrado, regulando en la Parte III del Libro VII los procesos matrimoniales. En particular, en cuanto al proceso de nulidad, el Canon 1685 dispone que “en cuanto la sentencia se haya hecho ejecutiva, el Vicario judicial debe notificarla al Ordinario del lugar en que se celebró el matrimonio. Y éste debe cuidar de que se anoten cuanto antes en el Libro de matrimonios y en el de bautismos la nulidad que se ha declarado y las prohibiciones que quizá se hayan señalado”.

VIII

Por otra parte, el artículo VI del Acuerdo con la Santa Sede sobre asuntos jurídicos, de 3 de enero de 1979, ratificado por Instrumento de 4 de diciembre de 1979, dispone en su apartado 1 que “el Estado reconoce los efectos civiles al matrimonio celebrado según las normas del Derecho Canónico”, añadiendo que “los efectos civiles del matrimonio canónico se producen desde su celebración. Para el pleno reconocimiento de los mismos, será necesaria la inscripción en el Registro Civil, que se practicará con la simple presentación de certificación eclesiástica de la existencia del matrimonio”.

En relación con este precepto, añade el Protocolo Final del Acuerdo que “inmediatamente de celebrado el matrimonio canónico, el sacerdote ante el cual se celebró entregará a los esposos la certificación eclesiástica con los datos exigidos para su inscripción en el Registro Civil. Y en todo caso, el párroco en cuyo territorio parroquial se celebró el matrimonio, en el plazo de cinco días, transmitirá al encargado del Registro Civil que corresponda el acta del matrimonio canónico para su oportuna inscripción, en el supuesto de que ésta no se haya efectuado ya a instancia de las Partes interesadas”.

Por otra parte, según el apartado 2 “los contrayentes, a tenor de las disposiciones del Derecho Canónico, podrán acudir a los Tribunales eclesiásticos solicitando declaración de nulidad o pedir decisión pontificia sobre matrimonio rato y no consumado. A solicitud de cualquiera de las Partes, dichas resoluciones eclesiásticas tendrán eficacia en el orden civil si se declaran ajustadas al Derecho del Estado en resolución dictada por el Tribunal civil competente”.

En este sentido, el Código Civil determina en su artículo 60 que “el matrimonio celebrado según las normas del Derecho canónico o en cualquiera de las formas religiosas previstas en el artículo anterior produce efectos civiles. Para el pleno reconocimiento de los mismos se estará a lo dispuesto en el Capítulo siguiente”, referido a la inscripción del matrimonio en el Registro Civil.

Así, el artículo 61 prevé que “el matrimonio produce efectos civiles desde su celebración”, si bien “para el pleno reconocimiento de los mismos será necesaria su inscripción en el Registro Civil”. Añade el artículo 63 que “la inscripción del matrimonio celebrado en España en forma religiosa se practicará con la simple presentación de la certificación de la Iglesia o confesión respectiva, que habrá de expresar las circunstancias exigidas por la legislación del Registro Civil”, aunque “se denegará la práctica del asiento cuando de los documentos presentados o de los asientos del Registro conste que el matrimonio no reúne los requisitos que para su validez se exigen en este Título”.

IX

De todo lo que acaba de indicarse cabe concluir que el matrimonio implica el compromiso de dos contrayentes, adquirido por la prestación por ambos de su consentimiento para la celebración.

Por otra parte, desde el punto de vista canónico, el matrimonio será inscrito en el libro de matrimonios y anotado en el de bautismos, constituyendo un vínculo indisoluble, si bien será posible declarar su nulidad conforme a las normas de derecho canónico, procediéndose en ese caso a la práctica de la correspondiente inscripción y anotación en los mencionados libros.

Además, desde el momento de su celebración el matrimonio canónico produce los efectos civiles previstos en el Código Civil, si bien dicho matrimonio deberá ser objeto de inscripción en el Registro. La inscripción se producirá a instancia de los cónyuges, si bien el sacerdote deberá comunicar al Registro Civil en el plazo de cinco días desde la celebración certificación eclesiástica del mismo”.

El matrimonio inscrito producirá los efectos establecidos a tal efecto en el Código Civil, pudiendo dichos efectos prolongarse incluso después de la separación o de la disolución civil del matrimonio, conforme a lo establecido en el Capítulo IX del Título IV del Libro I del Código Civil, referido a los efectos de la nulidad, separación y divorcio.

X

El artículo 16 de la Ley Orgánica 15/1999 regula el ejercicio de los derechos de rectificación y cancelación por parte de los afectados, disponiendo su apartado 2 que “serán rectificadas o canceladas, en su caso, los datos de carácter personal cuyo tratamiento no se ajuste a lo dispuesto en la presente Ley y, en particular, cuando tales datos resulten inexactos o incompletos”.

Por otra parte, el artículo 16.5 dispone que “los datos de carácter personal deberán ser conservados durante los plazos previstos en las disposiciones aplicables o, en su caso, en las relaciones contractuales entre la persona o entidad responsable del tratamiento y el interesado”. Se reemplaza así lo dispuesto en la Ley Orgánica 5/1992, cuyo artículo 15.4 establecía que “la cancelación no procederá cuando pudiese causar un perjuicio a intereses legítimos del afectado o de terceros o cuando existiese una obligación de conservar los datos”.

A su vez, recuerda el artículo 16.4 que “si los datos rectificadas o cancelados hubieran sido comunicados previamente, el responsable del tratamiento deberá notificar la rectificación o cancelación efectuada a quien se hayan comunicado, en el caso de que se mantenga el tratamiento por este último, que deberá también proceder a la cancelación”.

En desarrollo de la Ley Orgánica, el artículo 31.2 de su Reglamento, aprobado por Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, señala que “el ejercicio del derecho de cancelación dará lugar a que se supriman los datos que resulten ser inadecuados o excesivos, sin perjuicio del deber de bloquear conforme a este Reglamento”.

El artículo 33 del Reglamento regula los supuestos de denegación del derecho, disponiendo que:

1. La cancelación no procederá cuando los datos de carácter personal deban ser conservados durante los plazos previstos en las disposiciones aplicables o, en su caso, en las relaciones contractuales entre la persona o entidad responsable del tratamiento y el interesado que justificaron el tratamiento de los datos.

2. Podrá también denegarse los derechos de rectificación o cancelación en los supuestos en que así lo prevea una Ley o una norma de derecho comunitario de aplicación directa o cuando éstas impidan al responsable del tratamiento revelar a los afectados el tratamiento de los datos a los que se refiera el acceso.

3. En todo caso, el responsable del fichero informará al afectado de su derecho a recabar la tutela de la Agencia Española de Protección de Datos o, en su caso, de las autoridades de control de las Comunidades Autónomas, conforme a lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.



Por último, dentro de las disposiciones comunes a los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, el artículo 25.8 del reglamento dispone que “cuando las leyes aplicables a determinados ficheros concretos establezcan un procedimiento especial para la rectificación o cancelación de los datos contenidos en los mismos, se estará a lo dispuesto en aquéllas”.

XI

Como se ha indicado, el derecho de cancelación deberá ser atendido en caso de que los datos sobre los que el mismo se ejercita resulten contrarios a lo dispuesto en el artículo 4.3 de la Ley Orgánica 15/1999, es decir, cuando los mismos resulten inexactos, inadecuados o excesivos, no respondiendo a la situación actual del afectado.

Así lo han apreciado esta Agencia Española de Protección de Datos y la Audiencia Nacional en los supuestos en los que el afectado ha ejercitado su derechos de cancelación a los datos referidos a su inscripción en el libro de bautismos, considerando que la solicitud de cancelación del afectado implica una manifestación de su disconformidad con la condición de católico, debiendo actualizarse el registro con la indicación de que el interesado ha ejercitado tal derecho para que el contenido del libro pueda considerarse completo.

Sin embargo, en el supuesto ahora analizado, la solicitud de cancelación no implica únicamente una manifestación del afectado referida a su profesión de la fe católica, sino que implica su voluntad de que no conste como celebrado un matrimonio efectivamente contraído, sin que se haya invocada causa alguna que ponga de manifiesto la inexactitud del dato objeto de la cancelación.

En efecto, en el supuesto referido al libro de matrimonios, la constancia registral se refiere a la celebración misma del matrimonio, sin que pueda predicarse de dicho reflejo registral manifestación alguna relacionada con las creencias religiosas del afectado.

En efecto, el propio Código de Derecho Canónico reconoce la posibilidad de que, previa la dispensa a la que se refiere el canon 1125, puedan contraer matrimonio canónico un cónyuge bautizado y otro no bautizado, aclarando el canon 1059 que el matrimonio “aunque sea católico uno solo de los contrayentes, se rige no sólo por el derecho divino, sino también por el canónico, sin perjuicio de la competencia de la potestad civil sobre los efectos meramente civiles del mismo matrimonio”.

Por tanto, la fundamentación jurídica que justificaba la estimación de las solicitudes de cancelación de los datos en los libros de bautismo, con el alcance mantenido en las diversas resoluciones dictadas por esta Agencia no puede sin más fundar la cancelación de los datos del matrimonio del

correspondiente libro sacramental, dado que, como primera cuestión a tener en cuenta, ni siquiera es requisito excluyente en la totalidad de los casos el hecho de que uno de los contrayentes no se encuentre bautizado. Si ello es así, difícilmente podrá fundarse la solicitud de cancelación en el hecho de manifestar públicamente el afectado que ya no profesa la religión católica.

XII

Por otra parte, no debe olvidarse que el matrimonio, además de su configuración canónica de sacramento, es resultado de un acuerdo de voluntades entre los dos contrayentes, como pone de manifiesto el propio Código de Derecho Canónico y que además la celebración del matrimonio en forma canónica produce efectos civiles una vez inscrito el matrimonio en el Registro Civil.

La primera de las cuestiones que acaban de manifestarse implica que los asientos relacionados con el matrimonio que consten en el correspondiente libro sacramental no sólo afectan al afectado que solicita la cancelación, sino al otro contrayente que no ejercita tal derecho, persistiendo entre ambos una relación jurídica derivada del concurso de sus consentimiento que, según lo dispuesto en la normativa canónica tiene carácter imperturbable, no pudiendo entenderse como no hecha a menos que se acuerde a través del correspondiente procedimiento la nulidad del vínculo.

De este modo, el ejercicio del derecho de cancelación por parte de uno solo de los contrayentes implicaría la cancelación de un dato, el del matrimonio, que como se señala en la consulta afecta al otro, siendo así que desde el punto de vista canónico la celebración del matrimonio produce efectos jurídicos para ambos contrayentes desde el momento de su celebración y de forma permanente o al menos hasta que proceda su nulidad.

Por este motivo, debe tenerse en cuenta lo dispuesto en los artículos 16.5 de la Ley Orgánica 15/1999 y 33.1 de su Reglamento de desarrollo. EL precepto últimamente citado señala que “la cancelación no procederá cuando los datos de carácter personal deban ser conservados durante los plazos previstos en las disposiciones aplicables o, en su caso, en las relaciones contractuales entre la persona o entidad responsable del tratamiento y el interesado que justificaron el tratamiento de los datos”.

Ciertamente, como señala el precepto, la excepción prevista en el mismo se refiere a las relaciones existentes entre el afectado y el responsable del tratamiento, pero no debe dejar de tenerse en cuenta que, como se ha indicado, el tratamiento del dato del matrimonio en el correspondiente libro sacramental implica el nacimiento de una relación jurídica entre ambos contrayentes que persistirá, desde el punto de vista del derecho canónico, en

tanto no se declare la nulidad del vínculo, por lo que habrá de tenerse en cuenta la mencionada excepción.

Al propio tiempo, lo que ha venido indicándose no hace sino reiterar que no concurrirán en el dato los requisitos exigibles para que proceda la cancelación, toda vez que no ejerciéndose ese derecho por parte del otro contrayente no cabe considerar en modo alguno el dato de la celebración del matrimonio como contrario al artículo 4.3 de la Ley Orgánica 15/1999. En este sentido, debe recordarse que el hoy derogado artículo 15.4 de la Ley Orgánica 5/1992 disponía que “la cancelación no procederá cuando pudiese causar un perjuicio a intereses legítimos del afectado o de terceros”.

XIII

Al propio tiempo, como también se ha descrito con anterioridad, del Acuerdo sobre Asuntos Jurídico y de la redacción posterior del Código Civil se desprende que el matrimonio celebrado en la forma canónica produce plenos efectos civiles una vez se encuentra inscrito en el Registro Civil, lo que instarán los contrayentes y, en todo caso, el sacerdote oficiante mediante la comunicación de la información necesaria para la inscripción en los cinco días siguientes a la celebración del matrimonio canónico.

En consecuencia, además de dar lugar al nacimiento de una relación jurídica sujeta al derecho canónico, la celebración del matrimonio en forma religiosa implica igualmente el nacimiento de una relación de derecho civil cuyos efectos se extenderán desde el momento de la celebración y aún en el supuesto de que, sin perjuicio de lo señalado en el ámbito canónico sobre la indisolubilidad del vínculo, se produzca la disolución civil del matrimonio.

En este sentido, las normas que se han mencionado implican una correlación entre el registro civil y el registro de matrimonios que habrá de mantenerse, al menos en tanto el vínculo no haya sido objeto de anulación en el ámbito canónico y los efectos de dicha anulación no hayan sido ratificados por la jurisdicción civil o haya tenido lugar la declaración civil de nulidad o divorcio.

Por este motivo, no sería posible atender a la solicitud de cancelación de uno de los contrayentes en el libro de matrimonios, que daría lugar a una disparidad entre dicho libro y el Registro Civil que resultaría contraria a lo exigido por el Código Civil, en cumplimiento del Acuerdo sobre Asuntos Jurídicos.

El ejercicio de la cancelación y la atención efectiva del mismo haría en ese caso desaparecer la causa que justifica la inscripción del matrimonio en el Registro Civil, produciendo así un efecto similar a la disolución del vínculo civil sin atender a los cauces específicamente previsto para ello en el Código.

No debe olvidarse que uno de los efectos de la cancelación será la comunicación de esta circunstancia a los cesionarios conocidos de los datos para que procedan igualmente a su cancelación en sus ficheros. En el caso ante el que nos encontramos, ya se ha dicho que el sacerdote deberá, en todo caso, trasladar al registro Civil la información necesaria para la inscripción del matrimonio en dicho Registro, toda vez que el matrimonio religioso produce plenos efectos civiles desde su inscripción.

Si se tiene en cuenta lo exigido por el artículo 16.4 de la Ley Orgánica 15/1999, la cancelación del matrimonio en el libro sacramental debería ser comunicada al Registro Civil para que se procediera igualmente a la cancelación del matrimonio en dicho Registro, lo que no se encontrará amparado por la normativa aplicable al mismo.

Debe recordarse que el Registro Civil se encuentra comprendido en la enumeración contenida en el artículo 2.3 de la Ley Orgánica 15/1999, quedando sometido a su normativa específica y, como ha tenido la ocasión de indicar esta Agencia y ha ratificado el Consejo de Estado en su dictamen al reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica, a la aplicación supletoria de la Ley Orgánica 15/1999.

Pues bien, la Ley de 8 de junio de 1957, del Registro Civil no prevé la posible cancelación de los asientos referidos a la celebración del matrimonio. A tal efecto, el artículo 76 señala que “las sentencias y resoluciones sobre validez, nulidad o separación del matrimonio y cuantos actos pongan término a ésta se inscribirán al margen de la inscripción de matrimonio”, refiriéndose el artículo 77 a la posibilidad de que “al margen también de la inscripción del matrimonio podrá hacerse indicación de la existencia de los pactos, resoluciones judiciales y demás hechos que modifiquen el régimen económico de la sociedad conyugal”.

En consecuencia, la cancelación del dato del matrimonio en el libro sacramental, instada por uno de los contrayentes implicaría el deber de comunicación al Registro Civil de esta circunstancia para que se procediera también a la cancelación del dato en dicho registro, siendo la misma contraria a su normativa reguladora que ni siquiera prevé esa cancelación en caso de disolución civil del vínculo.

XIV

En este mismo sentido, debe tenerse en cuenta lo señalado por el Tribunal Constitucional en su Sentencia 141/2000, de 29 de mayo, al indicar que:



"(...) Cuando el Art. 16.1 C.E. se invoca para el amparo de la propia conducta, sin incidencia directa sobre la ajena, la libertad de creencias dispensa una protección plena que únicamente vendrá delimitada por la coexistencia de dicha libertad con otros derechos fundamentales y bienes jurídicos constitucionalmente protegidos. Sin embargo, cuando esa misma protección se reclama para efectuar manifestaciones externas de creencias, esto es, no para defenderse frente a las inmisiones de terceros en la libertad de creer o no creer, sino para reivindicar el derecho a hacerles partícipes de un modo u otro de las propias convicciones e incidir o condicionar el comportamiento ajeno en función de las mismas, la cuestión es bien distinta.

(...) Desde el momento en que sus convicciones y la adecuación de su conducta a las mismas se hace externa, y no se constriñe a su esfera privada e individual, haciéndose manifiesta a terceros hasta el punto de afectarles, el creyente no puede pretender, amparado en la libertad de creencias del Art. 16.1 C.E., que todo límite a ese comportamiento constituya sin más una restricción de su libertad infractora del precepto constitucional citado; ni alterar con el sólo sustento de su libertad de creencias el tráfico jurídico privado o la obligatoriedad misma de los mandatos legales con ocasión del ejercicio de dicha libertad, so pena de relativizarlos hasta un punto intolerable para la subsistencia del propio Estado democrático de Derecho del que también es principio jurídico fundamental la seguridad jurídica."

Por este motivo, dados los efectos que la celebración del matrimonio canónico produce sobre el derecho civil, la mera invocación de uno de los contrayentes amparada en el ejercicio del derecho de cancelación no puede fundamentar sin más la cancelación de los datos contenidos en los libros de matrimonios, dado que esa cancelación y el consiguiente borrado o bloqueo del dato produciría un efecto sobre el tráfico jurídico que no puede obtenerse a través del ejercicio del derecho consagrado por la Ley Orgánica 15/1999.

XV

Lo que acaba de exponerse conduce a la necesidad de tener en cuenta una última consideración, derivada de las disposiciones establecidas con carácter general para los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en el artículo 25 del Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999.

Conforme dispone el artículo 25.8 del citado Reglamento "cuando las leyes aplicables a determinados ficheros concretos establezcan un procedimiento especial para la rectificación o cancelación de los datos contenidos en los mismos, se estará a lo dispuesto en aquéllas".



Pues bien, las normas aplicables al fichero al que ahora se está haciendo referencia, el libro de matrimonios, contenidas en el Código de Derecho canónico, prevén como regla general la indisolubilidad del vínculo matrimonial canónico y la constancia registral de las resoluciones que puedan afectar al matrimonio como consecuencia de la declaración de su nulidad, quedando sometido el contenido del libro, precisamente, a las mencionadas reglas y sin que pueda procederse a la cancelación de los datos a través de un procedimiento distinto.

Debe en este sentido reiterarse nuevamente que la inscripción del matrimonio en el libro no tiene por objeto una manifestación de la profesión de fe del contrayente, que dependa exclusivamente de su voluntad, como sucedería en el caso del libro de bautismos, sino el reflejo de un acuerdo de voluntades con el otro contrayente que produce efectos jurídicos, canónicos y civiles, no sólo sobre quien ejercita su derecho de cancelación, sino sobre el contrayente que no ha solicitado la misma.

Del mismo modo, las normas reguladoras del registro Civil establecen, como se ha señalado, un procedimiento específico para que la disolución civil del vínculo tenga constancia registral, si bien sin producir siquiera el efecto de la cancelación registral, sino únicamente incorporándose como anotación marginal del asiento de matrimonio.

XVI

No obstante, la desestimación de la solicitud de cancelación no impide que, siguiendo lo que se ha venido indicando en anteriores resoluciones de esta Agencia respecto de los Libros de Bautismos no sea posible adoptar alguna medida que garantice la manifestación efectuada por el afectado, basada en su deseo de manifestar pública su no pertenencia a la Iglesia Católica.

En este sentido, la Sentencia de la Audiencia Nacional de 10 de octubre de 2007 señalaba en el último de sus Fundamentos de Derecho lo siguiente:

“Ya dijimos anteriormente que los asientos registrales del Libro de Bautismo constituyen al menos una apariencia de pertenencia a la Iglesia Católica por lo que es legítimo que quien se sienta inquietado por el contenido de dicho asiento, en el ejercicio de su libertad de conciencia, quiera que de alguna manera se deje constancia de su oposición a ser considerado como miembro de la misma, de suerte que lo interesado por XXXXXX, en la forma en que fue acogido por la Agencia Española de Protección de Datos en la parte dispositiva de su resolución no puede considerarse, en ese ejercicio de ponderación, ni desproporcionado ni constitutivo de una restricción intolerable de la autonomía de la Iglesia para organizarse libremente, por lo que ninguna



tacha puede hacerse a la Administración desde la perspectiva del derecho fundamental consagrado en el artículo 16.1 de la Constitución Española. Como tampoco puede hacerse reparo alguno con la forma con la que la Agencia ha amparado el derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal pues la resolución garantiza el contenido esencial de dicho derecho sin que se derive de su ejecución una alteración sustancial del Libro de Bautismo.”

Teniendo en cuenta lo que acaba de indicarse, sí sería preciso que el Libro de Matrimonios reflejase la manifestación realizada por el afectado, mediante la indicación a través de una anotación marginal en el mencionado libro de la manifestación voluntad del afectado de no pertenencia a la Iglesia Católica.

XVII

A la vista de todo lo señalado debe concluirse, en relación con los Libros de Matrimonios, que no procedería atender la solicitud de cancelación efectuada, debiendo tenerse en cuenta lo siguiente:

- El razonamiento jurídico que ha justificado las distintas resoluciones de la Agencia Española de Protección de Datos y de la Audiencia Nacional en relación con los libros de bautismo no resulta extrapolable sin más a este supuesto.
- En el presente caso, la inscripción del matrimonio implica la existencia de una relación jurídica entre el contrayente que ejercita el derecho y el otro contrayente cuya existencia no puede quedar al mero arbitrio de una de ellas.
- Dicha relación jurídica, sujeta al derecho canónico, produce igualmente efectos civiles en el momento de la inscripción del matrimonio en el Registro Civil, produciendo dichos efectos incluso en el supuesto de disolución civil del vínculo.
- Las normas aplicables al registro sacramental y las que son de aplicación al registro civil establecen reglas específicas en relación con la nulidad o disolución, respectivamente, del vínculo matrimonial, que serían las aplicables en el supuesto en que el afectado deseara que se produjese tal nulidad o disolución.

Por tanto, en relación con la solicitud de ejercicio del derecho de cancelación de los datos en el Libro de Matrimonios procedería:

- Desestimar la reclamación de cancelación de los datos relativos a la celebración del matrimonio.



- Instar al Obispado para que remita al reclamante certificación en que haga constar que se ha practicado anotación marginal en el Libro de Matrimonios con su manifestación de voluntad de no pertenencia a la Iglesia Católica.